



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-007-2021-00023-01
Demandante:	Juan David Hincapié Castaño
Demandado:	Analytica S.A.S. en Liquidación Judicial
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín
Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Sanción moratoria

**Medellín, febrero quince (15) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la sociedad demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 9 de agosto de 2022, en el proceso Ordinario laboral instaurado por el señor JUAN DAVID HINCAPIE CASTAÑO en contra de la sociedad ANALYTICA S.A.S., hoy en liquidación judicial, radicado 05001-31-05-007-2021-00023-01

**1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor JUAN DAVID HINCAPIE CASTAÑO convocó a juicio a la sociedad ANALYTICA S.A.S., hoy en liquidación judicial, pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, el cual terminó sin justa causa, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa; al pago de las prestaciones sociales causadas y no pagadas; al pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y al pago de la sanción por no consignación de las cesantías conforme al numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la indexación de las condenas.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Juan David Hincapié Castaño, celebró el 12 de septiembre de 2003, contrato de trabajo a término indefinido con la sociedad Analytica S.A.S., para prestar la labor de ingeniero de soporte, siendo asignado un salario variable, compuesto de un básico de \$1.690.000, más comisiones del 2% sobre las ventas de servicio técnico. Se narró que durante toda la relación laboral al actor le fueron pagadas las prestaciones sociales, no obstante, respecto de las cesantías, estas eran pagadas de forma tardía y no fueron consignadas las del año 2018.

Finalmente se indicó, que el 14 de marzo de 2019 la demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, sin cancelar la respectiva indemnización y quedó adeudando las prestaciones sociales, cesantías de 2019, prima del primer semestre de 2019, vacaciones del año 2019 y comisiones de noviembre de 2018 y febrero de 2019.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

La sociedad accionada no dio respuesta a la demanda.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO.**

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, decide el litigio mediante fallo proferido el 9 de agosto de 2022, en el cual declaró que entre Analytica S.A.S. en Liquidación como empleadora y el señor Juan David Hincapié Castaño en calidad de trabajador existió un contrato laboral a término indefinido entre el 12 de septiembre de 2003 hasta el 14 de marzo de 2019; declaró que el contrato fue terminado por la empleadora sin justa causa; condenó a la sociedad Analytica S.A.S. en Liquidación, a pagarle al demandante los siguientes conceptos: \$2.095.736 por cesantías del año 2018; \$751.604 por cesantías proporcionales de 2019; \$751.604, por prima de servicios proporcionales del año 2019; \$375.802 por vacaciones proporcionales del 2019; \$15.685.653 por indemnización por despido injusto; \$1.274.459 por indemnización moratoria del numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; \$35.831.914 por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; condenó a la accionada a reconocer y pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre los valores adeudados desde el 15 de marzo de 2021 y hasta el pago efectivo de las obligaciones, ordenando a la liquidadora designada que incluya las obligaciones derivadas de la sentencia dentro del inventario de las acreencias de la sociedad en liquidación, dándole la prelación que le corresponde a los créditos laborales.

#### **1.4.- RECURSO**

La apoderada de la sociedad accionada interpone recurso de apelación, señalando que si bien no hubo una contestación efectiva de la demanda hay medios probatorios dentro de la misma que debieron ser valorados, sin que pueda olvidarse que actualmente la sociedad demandada se encuentra en proceso de liquidación judicial, el cual a su vez tiene un trámite determinado y específico, toda vez que la misma Ley 1116 de 2006 trae unas oportunidades procesales en las cuales los actores deben presentar sus acreencias en debida forma, actualizarlas o manifestar que no se encuentran conformes con las presentadas ante el juez concursal, lo que no ocurrió en el caso concreto, donde al demandante se le dio traslado inicialmente de las acreencias presentadas y

calificadas dentro del proceso de reorganización y posteriormente en la presentación, graduación y calificación de acreencias de la liquidación judicial que actualmente se encuentra en firme, en ese orden de ideas las sumas de dinero a cancelar a favor del demandante deben ser aquellas reconocidas y que se encuentran en firme dentro del proceso de calificación y graduación del proceso concursal.

Sostuvo que no comparte la posición adoptada por el Despacho en relación a la mala fe en que supuestamente incurrió la sociedad Analitycas S.A.S., toda vez que como previamente se había expresado la empresa se encontraba en una situación económica complicada en la cual no era solvente y no tenía los recursos necesarios para mantener su operación y el pago de los dineros a sus trabajadores razón que se confirma con el proceso de reorganización empresarial al cual se sometió la empresa, recordando que dicho proceso, a diferencia del proceso de liquidación como tal, no pretende desconocer los dineros ni evadir jurídicamente los pagos de las acreencias laborales o de cualquier otro tipo, sino por el contrario busca establecer unos acuerdos de negociación con las partes para lograr satisfacer a totalidad las acreencias que estas tienen, situación que está comprobada y que no puede ser desconocida, como tampoco puede desconocerse que el acuerdo fue suscrito, no fue objetado en ningún momento por el demandante y quedó en firme.

Expuso que desafortunadamente y posterior al acuerdo de reorganización se entró en una época de pandemia, siendo un hecho notorio que afectó gravemente la operación de la sociedad, lo que llevó a la misma a incumplir ese acuerdo de reorganización que se había suscrito, y la llevó a la liquidación, en razón a ello no puede manifestar el despacho que la demandada actuó de mala fe o que voluntariamente decidió omitir los pagos al demandante, contrario a ello buscó una opción de llegar a un acuerdo en los términos de la reorganización empresarial, la cual, finalmente, por la pandemia no se cumplió. Por lo anterior, presenta inconformidad frente a las sanciones moratorias impuestas del artículo 65 C.S.T, así como la indemnización moratoria respecto al pago de las cesantías y a los intereses moratorios decretados.

## **1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión no se pronunció ninguna de las partes.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que, en virtud del principio de consonancia, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.2. PROBLEMAS JURIDICOS**

Deberá la Sala Determinar:

¿Si es procedente revocar las condenas impuestas a la sociedad Analytica S.A.S., relacionadas con el pago de la indemnización consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, por el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y la indemnización regulada en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no consignación de las cesantías a un fondo especializado, verificando para tal fin, si el proceso de reorganización y posterior liquidación de la sociedad accionada, constituye una razón que justifique el no pago oportuno de las acreencias laborales al actor y demuestre su buena fe?

### **2.3. TESIS**

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual, la sociedad Analytica S.A.S., no acreditó un actuar de buena fe que la exonere de las

sanciones impuestas, no siendo suficiente por si solo, el hecho de haberse acogido a un proceso de reorganización, como justificación de los retrasos u omisiones en los pagos de los salarios y prestaciones sociales del demandante, por lo tanto, la sentencia debe ser CONFIRMADA y MODIFICADA en relación a la fecha hasta la cual se deberán reconocer los intereses moratorios.

#### **2.4. HECHOS NO CONTROVERTIDOS EN LA INSTANCIA**

Encuentra la Sala que no es objeto de controversia que entre el señor JUAN DAVID HINCAPIE CASTAÑO y la sociedad ANALYTICA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, existió un contrato de trabajo, cuyo extremo inicial corresponde al 12 de septiembre de 2003 y el extremo final el 14 de marzo de 2019, relación laboral que terminó por decisión unilateral y sin justa causa por parte del empleador.

Tampoco hay oposición en sede de apelación a las condenas impartidas por el a quo, en relación con las prestaciones sociales, vacaciones e indemnización por despido sin justa causa, adeudadas al promotor del proceso.

#### **2.5. PREMISAS NORMATIVAS**

##### ***Sanción Moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo***

El no pago de los salarios y prestaciones sociales, fue calificado por el legislador de tiempo atrás, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2001, dispone:

*“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:*

*1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley*

*o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.*

*Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.*

En este tema, ha sido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática.

En este sentido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó “*La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016).*”

De modo que lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia Radicación 32529 de 2009, así:

*“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria “... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador”, porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta*

*probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción”.*

Lo anterior resulta razonable, además, teniendo en cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles y justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario, competen exclusivamente al empleador.

## **2.6 CASO CONCRETO**

En el sublite, se tiene que la juzgadora de primera instancia, encontró que la sociedad Analytica S.A.S., en liquidación, adeuda al actor las cesantías del año 2018 y las proporcionales de 2019; la prima de servicios de 2019, las vacaciones proporcionales de 2019 y la indemnización por despido injusto, aspectos que no fueron motivo de reparo, resaltando, que de manera general señala la apoderada de la pasiva, que los dineros que se adeudan al pretensor son los reconocidos dentro del proceso de calificación y graduación del proceso concursal, sin embargo, no acreditó en el proceso, la suma que se reconoció en favor del señor Juan David Hincapié dentro de dicho trámite concursal, de ahí que, no existen elementos que permitieran que la Juez cognoscente realizara los respectivos cálculos comparativos.

Ahora bien, en lo que interesa al recurso de alzada, debe decirse que comparte esta Corporación las consideraciones de la a quo, para determinar la procedencia de las sanciones moratorias, en tanto que, no se acreditó una causa razonable, plausible, entendible que justifique el no pago de las prestaciones sociales del demandante en vigencia de la relación laboral, pues la sociedad accionada, notificada de la demanda, no emitió pronunciamiento alguno, ni hizo uso de su derecho de defensa en la oportunidad procesal pertinente, estimando que, contrario a lo sostenido por la apoderada recurrente, el solo hecho de que la sociedad accionada hubiere iniciado proceso de reorganización empresarial, no es una razón que por sí sola justifique el incumplimiento de las obligaciones del



empleador para con su colaborador, siendo claro, que, en este tema, la carga de la prueba recaía exclusivamente en el empleador.

Sobre el particular, desde antaño ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que los problemas o crisis económicas del empleador, no constituye por sí solos una situación que justifique el incumplimiento del pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, por lo que en principio no exonera de la indemnización moratoria, siendo necesario en todo caso, escrutar la conducta del empleador, así lo ha trazado la alta Corporación, desde la sentencia 7393 del 18 de septiembre de 1995, sentencia radicación 37288 del 24 de enero de 2012 y más recientemente en sentencia SL 845 de 2021, última en la cual se indicó:

*“Por anticipado, se advierte que la censura tiene razón cuando asevera que el ad quem desacertó al concluir que la crisis financiera de la empresa constituye por sí sola una conducta justificante del impago de los salarios y prestaciones. En efecto, esta Corporación tiene adocctrinado que dichas situaciones no exoneran de la de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que es necesario que el empleador demuestre que esa circunstancia le produjo una insolvencia o iliquidez tal que le impidió cumplir con sus obligaciones laborales”*

Igualmente, debe recordarse que el examen de la buena fe del empleador en los eventos en que este incumple con el pago de sus obligaciones respecto del trabajador, debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan al momento de la terminación del vínculo laboral, encontrando como en el presenta caso, al demandante le fue finalizado el contrato de trabajo el 14 de marzo de 2019 y posteriormente, el 26 de marzo de 2019, se dio el inicio al proceso de reorganización, conforme al auto 610-000613 de 2019.

Destaca este Juez Plural que, en la misiva en que se comunica al pretensor la terminación del contrato, se indicó: *“De manera atenta nos permitimos informarle que ANALYTICA S.A.S ha decidido dar por terminado de forma unilateral el contrato de trabajo suscrito entre usted y esta compañía a partir de la fecha de la presente comunicación.*

*No obstante, lo anterior, ANALYTICA reconocerá a usted, la indemnización, junto con la liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales legales correspondientes*”. Nótese como en la comunicación, no hace referencia el empleador a dificultad económica alguna y contrario a ello, plasmó un compromiso de pago de la indemnización y de los salarios y prestaciones sociales.

En igual sentido, desconoce la Sala, los acuerdos de pago que en el trámite de reorganización efectuó la accionada con el accionante, siendo palmario sí, que dichos acuerdos no se cumplieron, pues reconoce la apoderada recurrente que ello no fue posible atendiendo a que sobrevino la crisis de la pandemia, sin embargo, dicha situación que no es desconocida, no justifica los incumplimientos en los pagos, en consideración a que el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, fue declarada en marzo de 2020, es decir, cuando ya había transcurrido casi un año del finiquito de la relación laboral.

Así las cosas, procede la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, por el no pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del vínculo contractual, sanción que corresponde a un día de salario por cada día de retardo, esto es, en el caso concreto en razón a \$58.016 diarios, la cual corre a partir del 15 de marzo de 2019, hasta el 15 de marzo de 2021, para un total de \$41.772.768, suma que resulta superior a la liquidada por la a quo, que fue de \$35.831.914, no obstante, toda vez que la parte actora no presentó recurso, no es posible modificar la decisión. Asimismo, es procedente la condena al pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, desde el 16 de marzo de 2021 y hasta el 11 de octubre de 2021, fecha en la cual se decretó la liquidación judicial de la sociedad demandada y cesa la sanción moratoria, según se desprende del documento obrante en el anexo 15 del expediente digital, correspondiente al aviso expedido por la Superintendencia de Sociedades, por lo que se modificará el numeral 4° de la sentencia.

Finalmente, en relación a la sanción por la no consignación de las cesantías, conforme lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 90 de la Ley 50 de 1990, se tiene que en relación al auxilio de cesantías correspondientes al año 2018, las

mismas debieron ser consignadas al fondo especializado a más tardar el 15 de febrero de 2019, y atendiendo a que éstas no fueron canceladas, opera la sanción de un día de salario por cada día de retardo, la cual deberá liquidarse desde el 16 de febrero de 2019 y hasta el 14 de marzo de 2019, fecha de finalización de la relación laboral, como acertadamente lo refirió la a quo, es decir, por espacio de 27 días, ascendiendo la misma a \$1.566.450, suma que también resulta mayor a la liquidada por el Juzgado, no obstante este punto tampoco fue objeto de reparo por la activa, debiéndose en consecuencia confirmar la sentencia, para no hacer más gravosa la situación del apelante único.

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

#### **4. DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA**

1. Se **MODIFICA** el numeral cuarto de la sentencia objeto de apelación proferida el 9 de agosto de 2022, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido señor JUAN DAVID HINCAPIE CASTAÑO en contra de la sociedad ANALYTICA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, en el sentido de indicar, que la demandada deberá reconocer y pagar al actor, los intereses moratorios a la tasa máxima de los créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre los valores adeudados por concepto de prestaciones sociales, desde el 15 de marzo de 2021 y hasta el 11 de octubre de 2021.

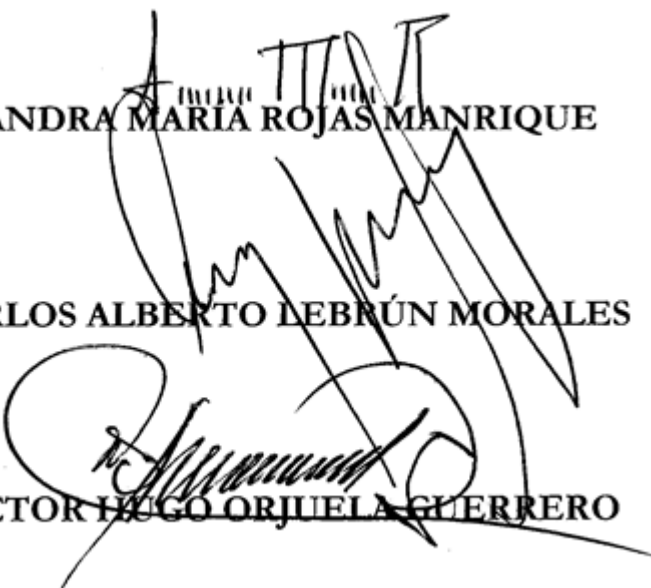
2. Se **CONFIRMA** en lo demás la sentencia apelada.

3. **COSTAS** en esta instancia a cargo de la demandada, inclúyase como agencias en derecho, la suma de \$1.160.000.

4. Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**